

España perderá 115.000 millones del fondo europeo si no acelera sus reformas

ÚLTIMA FASE DEL PLAN DE RECUPERACIÓN/ Bruselas insta a los Estados miembros a elevar sus esfuerzos de implementación para captar recursos comunitarios antes del final del programa al término de 2026.

Andrés Stumpf. Bruselas

La cuenta atrás es ya una realidad. Cinco años después del estallido de la pandemia, el histórico fondo de recuperación llamado a movilizar 650.000 millones de euros en dinero comunitario entra en su etapa final. Lo hace pese a que los países no han terminado de solicitar todos los recursos que tenían a su disposición y que a partir del 31 de diciembre del próximo año quedarán en el limbo.

España es uno de esos países. Hasta la fecha, ha recibido 48.000 millones de los casi 80.000 millones de los fondos disponibles en forma de subvenciones. Peor aún es la radiografía de los préstamos, pues el país optaba a lograr financiación en condiciones favorables por valor de 83.000 millones de los que por el momento ha captado cero.

En total, apenas ha conseguido un 29,5% de los fondos disponibles en uno u otro formato, pues tiene un 70% de las reformas e hitos que condicionaban estas solicitudes todavía pendientes.

En ese contexto, Bruselas ha urgido a España a acelerar sus planes para tratar de sacar el máximo partido al fondo para apuntalar su competitividad y crecimiento antes de que los recursos se pierdan. La recomendación se lanza para todos los países miembros, pero la Comisión Europea resalta que es especialmente importante para aquellos países en los que estos fondos tienen un mayor impacto macroeconómico.

Según estimaciones del Ejecutivo comunitario, los fondos que España tiene todavía disponibilidad de captar supondrían entre un 7% y un 8% del PIB.

“Con poco más de un año disponible hasta la fecha límite de agosto de 2026, el tiempo se acaba. Por eso hemos recomendado a algunos Estados miembros que aumenten sus esfuerzos de implementación. No hay tiempo que perder”, señaló ayer en una rueda de prensa el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis.

Y no habrá más tiempo. Frente a las especulaciones que apuntaban a que la Comisión podría alargar los tiempos para que los Estados miembros pudieran hacer



Carlos Cuerpo, ministro de Economía de España, ayer.

La parálisis legislativa puede costar cara

España ha sido uno de los países más beneficiados por los fondos de recuperación europeos NextGeneration EU, diseñados para estimular a las economías más afectadas durante la pandemia. Sin embargo, la hucha podría ser mucho mayor si el Gobierno lograra sacar adelante los compromisos pactados con la Comisión Europea y que desbloquearían más pagos para mejorar la competitividad. Según señalan fuentes

comunitarias, es posible que el paquete fuera demasiado ambicioso como para suscribirlo por completo por la complejidad de encontrar suficientes proyectos que absorbieran esa financiación y cumplieran las características de economía verde y digitalización exigidos por Bruselas. Sin embargo, existe margen en el terreno de las reformas para llegar mucho más lejos de lo que se ha llegado hasta ahora. El problema es que la fragilidad del Gobierno en España, que

tiene que atender a numerosos frentes y pactos para sacar adelante las necesarias reformas, lleva a una parálisis que se ha visto materializada, por ejemplo, en el impuesto al diésel. Esta medida, que lleva frenando los pagos a España desde mediados del pasado año, se antoja imposible de sacar adelante. El Gobierno, en estas circunstancias, podría optar por un pago parcial del paquete que salve el resto de los fondos sin introducir este impuesto, pero de momento

no ha optado por ello y se acaba el tiempo. El impacto macroeconómico que podría tener para España acceder a más fondos del programa de recuperación es tan grande que la propia Comisión ha incluido una referencia a la necesidad de acelerar los proyectos financiados bajo este plan como una de las seis grandes recomendaciones a la economía española presentadas ayer (ver página 24).

El Gobierno tiene pendiente cumplir el 70% de los hitos remitidos en su plan a la Comisión

La institución presidida por Ursula von der Leyen es consciente de que los Estados miembros no podrán acceder a todos los recursos a tiempo y que una parte de los más de 300.000 millones de euros entre transferencias y préstamos se perderá. El objetivo ahora es intentar que esos recursos a los que los países no tendrán acceso sean lo más limitados posible, por lo que ofrece algunas recomendaciones.

Para mitigar los retrasos,

los Estados miembros deben revisar exhaustivamente los planes presentados a la Comisión para garantizar que todos los hitos y objetivos puedan implementarse antes del 31 de agosto de 2026.

Existe la posibilidad de cambiar los hitos remitidos a la Comisión por otros que tengan un impacto similar en los objetivos verdes, de digitalización o competitividad. En ese sentido, fuentes comunitarias aseguran que sería aconsejable reemplazar aquellas reformas o inversiones que no puedan cumplirse antes de la fecha límite. Con ello, los Estados asumirían la pérdida de una parte de los pagos, pero evitarían quedarse atascados en el camino con una reforma o inversión que

no logran sacar adelante y que puede imposibilitarles acceder al resto de los fondos, como está siendo el caso con el impuesto al diésel en España.

“Las revisiones del plan también deben utilizarse para simplificar la redacción siempre que sea posible y facilitar la implementación”, aseguran desde Bruselas, que recuerdan que el plazo máximo en el que se puede solicitar los pagos es septiembre de 2026, pero que si se acumula un excesivo número de solicitudes y comprobaciones que realizar, la Comisión podría no tener la capacidad suficiente como para efectuar la transacción antes del término del programa, al término de ese mismo ejercicio.

China refuerza el control sobre la exportación de tierras raras

Expansión. Madrid

Las autoridades chinas han reforzado en los últimos días la vigilancia sobre las exportaciones de tierras raras con nuevas inspecciones, medidas contra la minería ilegal y una aplicación más estricta de los controles ya vigentes sobre estos minerales estratégicos. Según informa el diario hongkonés *South China Morning Post*, gobiernos locales de regiones meridionales como Guangxi, Guizhou y Hunan están implementando directivas del Ejecutivo central que exigen supervisar toda la cadena de producción y suministro de minerales críticos.

Las actuaciones incluyen el mapeo de exportadores, la mejora de sistemas de cumplimiento y el monitoreo de flujos de salida para evitar filtraciones irregulares. Así, ciudades como Wuzhou y Yunfu han establecido mecanismos de coordinación regional para intensificar la lucha contra la minería no autorizada, en particular en zonas sin licencia o fuera de los límites aprobados, según recoge *Efe*. Estas medidas se producen en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos, que, según medios de ese país, esperaba un levantamiento de los controles tras la tregua comercial alcanzada en mayo.

Por otro lado, la Asociación Europea de Proveedores de Automoción (CLEPA) alertó ayer de que los fabricantes de componentes para el automóvil en la UE ya están sufriendo “importantes perturbaciones” por las recientes restricciones a la exportación de tierras raras e imanes impuestas por China. “Estas restricciones han provocado el cierre de varias líneas de producción y plantas en toda Europa, y se prevé que los efectos se agraven en las próximas semanas a medida que se agoten las existencias”, declaró la CLEPA en un comunicado.

China impuso el pasado mes de abril restricciones a siete minerales clave, que exigen a los exportadores obtener una licencia previa para poder venderlos al extranjero, una medida que afecta a industrias sensibles como la electrónica, la automoción o la defensa. Se han presentado “cientos de solicitudes de licencias de exportación ante las autoridades chinas”, pero solo una cuarta parte parecen haber sido aprobadas.